

Enero 30 de 1947 (Tarde)

88ª REUNION — Continuación de la 28ª SESION EXTRAORDINARIA

Presidencia del doctor Ricardo C. Guardo y señor Silverio Pontieri

Secretarios: doctores Leonidas Zavalla Carbó y Rafael V. González

Prosecretario: señor Eduardo Sánchez Terrero

DIPUTADOS PRESENTES:

Albrieu, Oscar E.
 Alvarez, Juan Daniel
 Alvarez, Néstor
 Alvarez Pereyra, Manuel
 Alvarez Pérez, Vicente
 Alvarez Voces, Enrique
 Allub, Rosendo
 Andreotti, Antonio
 Aráoz, Ricardo E.
 Arévalo Cabeza, Jabel
 Argaña, José M.
 Arias, José
 Bagnasco, Vicente
 Barreiro, Carmelo
 Baulina, Angel V.
 Benítez, Antonio J.
 Bertini, Amadeo
 Bonazzola, Romeo E.
 Braga, Juan Carlos
 Bustos Fierro, Raúl
 Calcagno, Alfredo D.
 Cámara, Guillermo F.
 Cámpora, Héctor J.
 Camus, Eloy P.
 Candiotti, Alberto M.
 Casal, Raúl M.
 Casas Noblega, Armando
 Cleve, Ernesto
 Colom, Eduardo
 Cooke, John William
 Córdova, J. Salvador
 Corvalán, Luciano R.
 Curchod, Amado J.
 Decker, Rodolfo A.
 Degreef, Juan Ramón
 De la Torre, Juan
 Del Carril, Emilio Donato
 Del Mazo, Gabriel
 Delleplane, Luis
 Díaz Colodrero, Justo

Díaz de Vivar, Joaquín
 Dufau, Juan Adolfo
 Fajre, José Benito
 Fernández, Baltasar S.
 Fernández, Hernán S.
 Ferrando, Manuel P.
 Ferrer, Modesto
 Fregossi, Luis J.
 Frondizi, Arturo
 Galvagni, Saverio M.
 Garaguso, Bernardino Hipólito
 Garay, Marcelino S.
 García, Manuel
 García Quiroga, Alejandro
 Gericke, Carlos Gustavo
 Giménez Vargas, Francisco
 González Funes, Tomás
 Graña Etcheverry, Manuel
 Guardo, Ricardo C.
 Guillot, César Joaquín
 Kliks López, Guillermo
 Lareo, Ricardo
 Lasciar, Guillermo F.
 Letamendi, Balbino (h.)
 Liccaga, Félix J.
 López Serrot, Oscar
 Mac Kay, Luis R.
 Maineri, D. Jacinto
 Martínez Guerrero, Guillermo
 Martínez Luque, Enrique
 Mendiando, F. Daniel
 Messina, Humberto
 Montes de Oca, Carlos
 Montiel, Alcides E.
 Mosset Iturraspe, Mario
 Mujica, Rodolfo
 Noriega, Juan J.
 O'inalde, Rafael
 Peña Guzmán, Solano
 Perea, Pedro J.
 Petruzzini, Miguel
 Pirani, Antonio S.

Pomar, Gregorio
 Ponc, Angel L.
 Pontieri, Silverio
 Pueyrredón, Horacio Honorio
 Raña, Eduardo Antonio
 Ravignani, Emilio
 Reyes, Cipriano
 Reynés, Leandro R.
 Rodríguez de la Torre, Raúl
 Rodríguez, Nerio M.
 Rojas, Absalón
 Rojas, Nerio
 Rossi, José
 Rubino, Sidney Nicolás
 Rumbo, Eduardo I.
 San Millán, Ricardo Antonio
 Santander, Silvano
 Saravia, Teodoro S.
 Sarmiento, Manuel
 Sarraute, José Roberto
 Sobral, Antonio
 Solan, Emilio
 Sustaita Seiber, Héctor
 Tejada, Ramón Washington
 Tommasi, Victorio M.
 Toro, Ricardo
 Uranga, Raúl L.
 Valdez, Celestino
 Veloso Colombres, Manuel F.
 Vergara, Amado
 Villafañe, José María
 Visca, José Emilio
 Vischi, Albino
 Zaloni, Pedro P.
 Zara, Edmundo Leopoldo
 Zinny, Mario

Beretta, Eduardo
 Brugnerotto, Juan N. D.
 Cufre, Orlando H.
 Cuminetti Correa, Alcides D.
 Dri, Roberto
 Errecart, Juan A.
 Ianspolsky, Angel
 Joire, Hernán R.
 Kees, Gaspar
 Lencinas, José R.
 Mántaras, Manuel J.
 Mariategui, Angel S.
 Marotta, José
 Moreno, José Luis
 Ottonello, Benito J.
 Palacio, Ernesto
 Pasquini, José P. D.
 Pastor, Reynaldo A.
 Polizzi, Juan
 Ricagno, Roberto
 Sobral, Antonio
 Rodríguez, Manuel
 Rouggier, Valerio S.
 Sammartino, Ernesto E.
 Sargentini, Mario Alberto
 Urdapilleta, Oscar C.

AUSENTES, CON AVISO:

Balbin, Ricardo
 Boullosa, Emilio M.
 Busaniche, Julio J.
 Díaz, Manuel M.
 Obeid, Leonardo
 Pérez de la Torre, Horacio
 Repetto, Agustín
 Tesorieri, José V.
 Vanasco, Julio A.

AUSENTES SIN AVISO:

Malecek, José Enrique
 Orozco, Modesto V.

AUSENTES CON LICENCIA:

Antille, Diógenes C.
 Ayala López Torres, Francisco
 Ayerbe, Lázaro Balbino

SUMARIO

1.—Continúa la consideración del despacho de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley, en revisión, sobre creación del Cuerpo de Abogados del Estado. Se sanciona.

2.—Asunto entrado.

3.—Consideración del despacho de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento en el proyecto

de ley, en revisión, sobre pensión a la señora Isabel L. de Alric. Se sanciona.

4.—Consideración del despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley sobre modificación del régimen de venta de inmuebles del Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias. Se sanciona.

—En Buenos Aires, a los treinta días del mes de enero de 1947, siendo las 16 y 15:

1

CUERPO DE ABOGADOS DEL ESTADO

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a pasar lista.

—Se pasa lista.

Diputados presentes: Albrieu, Alvarez (J. D.), Alvarez Pereyra, Alvarez Pérez, Alvarez Vocos, Andreotti, Argaña, Arias, Baulina, Bertini, Bonazzola, Braga, Bustos Fierro, Calcagno, Cámpora, Cleve, Corvalán, Curchod, Decker, de la Torre, del Carril, del Mazo, Díaz Colodrero, Díaz de Vivar, Fernández (B. S.), Fernández (H. S.), Ferrando, Frondizi, Garaguso, Garay, García, García Quiroga, Gericke, Giménez Vargas, González Funes, Guillot, Klix López, Lareo, Lasciar, Martínez Guerrero, Montes de Oca, Montiel, Mosset Iturraspe, Osinalde, Petruzzi, Pomar, Ponce, Pontieri, Pueyrredón, Raña, Ravignani, Reyes, Rodríguez (N. M.), Rojas (A.), Rojas (N.), Rossi, Rubino, Rumbo, San Millán, Saravia, Sarmiento, Sarraute, Solanet, Tejada, Tommasi, Uranga, Valdez, Vergara, Villafañe, Vischi, Zanoni, Zara y Zinny.

Sr. Presidente (Guardo). — Continúa la sesión.

Está en consideración el artículo 1º del despacho de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley, en revisión, sobre creación del Cuerpo de Abogados del Estado (1).

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Ravignani. — Desearía que el señor miembro informante de la mayoría me dijera dentro de qué gran organización va a estar incluido este cuerpo de abogados, del punto de vista de la jerarquía administrativa; si dependerá de la presidencia, de algún ministerio o si constituirá una entidad autárquica.

Me permito hacer esta pregunta en vista de la indefinición que ofrece esta creación para que sepamos a qué atenernos y para que el propio Poder Ejecutivo y las reparticiones de la administración estén informadas de las características de esta organización.

Sr. Presidente (Guardo). — Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Sarraute. — Ya en la sesión de esta mañana ha sido planteada esa cuestión por el señor diputado Díaz Colodrero que había hecho la misma pregunta respecto de qué organismo oficial dependería este Cuerpo de Abogados del Estado.

Al responder había hecho una referencia a la situación actual, manifestando que actualmente los agentes fiscales o procuradores fiscales tienen funciones que se establecen en la ley cuando representan al Poder Ejecutivo o asumen la defensa del fisco nacional o del orden jurídico.

Había hecho esa referencia para decir que la ley no especifica de quién dependen y en consecuencia si vamos a este mismo proyecto nos encontramos que los miembros que componen esas delegaciones jurídicas que a la vez subsisten y que ahora existen en cada ministerio, dependen económica y disciplinariamente del ministerio en que desempeñan las funciones, es decir, que continúan dependiendo del ministerio actual. Seguirá entonces, la misma situación actual, cobrarán y figurarán en las mismas partidas del presupuesto de ese ministerio.

Ahora, el Cuerpo de Abogados del Estado, se puede decir, toma forma y estructura, en cuanto a las normas internas que se establecen de estructuración con fines de especialización, de orientación profesional, como dice el proyecto. Existe pues, una dirección que se llama Cuerpo de Abogados del Estado para establecer una orientación profesional dentro de todas estas asesorías.

Sr. Ravignani. — Pero la dirección general, ¿de quién depende?

Sr. Sarraute. — Ya voy a eso.

Este cuerpo de abogados, como digo, depende económica y disciplinariamente de cada ministerio, como el mismo proyecto de ley lo establece. Es decir que cobran y son corregidos disciplinariamente por el ministerio a donde pertenecen y tan solamente existe la vinculación profesional en cuanto a la orientación doctrinaria que el procurador del Tesoro establezca. En consecuencia, si tenemos presente la disposición constitucional del inciso 10 del artículo 86, llegamos a esto: cuando no está establecido por una ley específica, la dependencia directa existe con relación al Poder Ejecutivo, es decir, que dependen directamente del presidente de la República.

Sr. Presidente (Guardo). — Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. Díaz Colodrero. — Esta mañana había dirigido la misma pregunta que ha hecho el señor diputado por la Capital al señor miembro informante de la mayoría de la comisión. Confieso que a pesar del meritorio esfuerzo que ha hecho el señor diputado Sarraute para explicar la relación de dependencia de este Cuerpo de Abogados del Estado la explicación no es

(1) Véase el despacho en la página 20 de esta edición.

satisfactoria; y no lo es porque de la propia exposición de motivos de esta ley —explicada en el texto que conocemos del plan quinquenal, que ha tenido amplia difusión— se dice que uno de los objetivos que se busca con la creación de este cuerpo de abogados es unificar todo lo que sea materia de representación del fisco, vale decir, unificar opiniones de orden jurídico y también todo lo que se relaciona con las asesorías de las reparticiones administrativas. Para cumplir esa finalidad —aunque aquí no se dice expresamente, pero surge de los artículos de la ley— se crea una dirección general. Ahora bien, esta dirección general tiene que depender de algún ministerio. Esa es una norma elemental de derecho administrativo. Si se trata de unificar, de hacer que la interpretación de la doctrina y de la ley sea una por parte de todos los funcionarios encargados de la representación fiscal, es menester centralizar en una sola cabeza, en una sola directiva; de lo contrario ocurrirá que ha de subsistir la anarquía que se dice que hay actualmente. Lo que sucede, en realidad, es que, evidentemente, este proyecto de ley ha sido redactado por algún procesalista poco familiarizado con nuestras prácticas y con nuestras tradiciones administrativas. Se emplean en este proyecto de ley términos que son extraños a nuestro lenguaje jurídico y a nuestro lenguaje administrativo, como cuando se habla, por ejemplo, de «concurso oposición»; o cuando en un artículo se dice «ordenamiento».

Sr. Ravignani. — Eso es español.

Sr. Díaz Colodrero. — ...sin que se sepa qué quiere decir. El origen hispánico de esto es notorio. Más aún: este proyecto tiene una extraordinaria similitud con la ley de creación del Cuerpo de Abogados del Estado sancionada en 1927 en España, bajo la dictadura de Primo de Rivera. Una circunstancia especial ha hecho que se me extraviara el único texto que pude obtener de esa ley española relativa a la creación del Cuerpo de Abogados del Estado.

De allí, surge que el procesalista castizo que redactó esto, sin conocimiento de lo que es nuestra estructura administrativa, ha creado esta dirección general en el aire, que lo único que ha de hacer, por la forma en que el proyecto está redactado, es introducir una anarquía mucho mayor aún que la existente. Como esta ley pertenece a ese plan quinquenal, cuya propaganda escuchamos todos los días en las calles repiqueteando permanentemente sus bondades, es del caso pensar que, quizá, él no ha de ser tan bueno cuando posee fallas substanciales como ésta, ya que desde un principio se crea una importantísima repartición del Estado y no se sabe de quién va a depender.

Nada más.

Sr. Decker. — Pido la palabra.

No pensaba participar, señor presidente, en este debate porque creí que en la sesión de la

mañana quedaría sancionado el proyecto de ley en discusión. Como no ha ocurrido tal cosa, es que me permito refutar conceptos vertidos por el señor diputado preopinante.

En primer término ha hablado de una enorme laguna existente en este proyecto, mas revisándolo observo que el artículo 20 dice que el Poder Ejecutivo reglamentará esta ley en el término de noventa días, por lo cual, de acuerdo con elementales preceptos de derecho administrativo, considero que será ésa la oportunidad para que el Poder Ejecutivo determine la dependencia de algún ministerio...

Sr. Baulina. — La ley de organización de los ministerios debe tenerse en cuenta.

Sr. Decker. — Bien. No se alarme el señor diputado; nada ha pasado.

Considero que ésa será la oportunidad de establecer la dependencia. Además, el artículo 86, inciso 1º, de la Constitución establece que el presidente de la Nación es el jefe supremo y tiene a su cargo la administración general del país. En su virtud el señor presidente puede determinar que esa dirección general dependa de la Presidencia de la Nación. De lo contrario, de acuerdo con la ley de presupuesto, también puede determinarse su dependencia del Ministerio de Hacienda, siguiendo el criterio establecido con respecto al procurador general del Tesoro. Esto significa que en esta ley existe el recurso para salvar la laguna a que ha hecho referencia el señor diputado preopinante.

También quiero hacer referencia a una argumentación que he escuchado en boca de varios señores diputados de la minoría, en el sentido de que estamos sancionando el primer capítulo de la ley del plan quinquenal, como si el hecho de sancionar por separado cada una de sus distintas leyes implicara en sí una expresión de menor solidaridad para con el Poder Ejecutivo. Quiero contestar en esta oportunidad con palabras pronunciadas por el mismo señor presidente de la Nación, cuando se dirigió a los dirigentes obreros reunidos en el teatro Colón con motivo del plan quinquenal. Manifestó que lo iba a brindar al pueblo, para que éste lo estudiara y lo discutiera. Entonces, nosotros, representantes de ese pueblo, en una expresión de íntima solidaridad con el Poder Ejecutivo, lo estamos estudiando y lo vamos a discutir conscientemente. No se vea en ello una falta de solidaridad para con el Poder Ejecutivo, sino, por el contrario, una demostración evidente de que nuestro apoyo y nuestra adhesión nos permite, en todos los casos, discutir y aun corregir los proyectos, si ello es posible, debido a la perfectibilidad que es necesario imponer a las leyes.

Sr. Díaz Colodrero. — ¿Por qué la mayoría no provoca la discusión en general sobre la totalidad del plan quinquenal?

Sr. Visca. — ¿Por qué no la provocan ustedes?

Sr. Decker. — No es precisamente la mayoría quien debe provocar un debate sobre esta materia, sino los integrantes de la minoría, quienes son los llamados a provocar el debate, como se desprende de las palabras pronunciadas por distintos integrantes de ese sector en la tribuna pública, desde la cual tengo entendido se han referido en varias oportunidades. Sepan desde ya los señores diputados, que los integrantes de este sector no tienen ningún inconveniente en realizar el debate sobre el plan quinquenal con la amplitud que lo deseen.

Al contrario, conscientes de que los fundamentos de dicho plan son razonables y hacen a la felicidad y grandeza de la Nación, los diputados de nuestro sector están decididos a efectuarlo en cualquier momento, cuando así lo deseen los señores diputados. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Sr. Presidente (Guardo). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Ravignani. — Vuelvo al asunto en debate.

Se trata de una cuestión muy sencilla, que tratamos de aclarar por haber advertido justamente la falta de precisión en la ley.

El propio señor diputado por la mayoría ha establecido una discriminación con respecto a la dependencia de ese colegio de abogados. Ha dicho que las delegaciones dependen disciplinariamente de cada uno de los ministerios, y en cuanto a la dirección general, no le he entendido bien si él cree que depende del propio señor presidente de la República.

Sr. Albrieu. — Depende del procurador del Tesoro. La dirección general está bajo la jefatura de dicho funcionario.

Sr. Ravignani. — ¿Y ésta?

Sr. Albrieu. — Donde está actualmente.

Sr. Ravignani. — Del Ministerio de Hacienda.

El señor miembro informante de la mayoría dijo que dependía del presidente de la República; ahora el señor diputado cree que depende del Ministerio de Hacienda porque el procurador del Tesoro está en el Ministerio de Hacienda. Pongámonos de acuerdo...

Sr. Albrieu. — Si no lo cambia la ley, no lo puede hacer el Poder Ejecutivo.

Sr. Ravignani. — Repito que mi propósito es que la ley sea clara.

No advierten los señores diputados que la ley debe decir específicamente lo relativo a las dependencias de las grandes divisiones administrativas, o decir si es una división autárquica dentro de un ministerio. Las manifestaciones del señor diputado Decker sobre la facultad reglamentaria, nada tiene que hacer en este caso.

Sr. Albrieu. — En el artículo 2º se establece que dependerá del procurador del Tesoro; y la Procuración del Tesoro, mientras no cambie de ministerio, seguirá donde está.

Sr. Ravignani. — ¡Ah! Entonces quiere decir que este Cuerpo de Abogados está involucrado en un ministerio.

Sr. Albrieu. — En el Ministerio de Hacienda, donde está el procurador del Tesoro.

Sr. Ravignani. — Es una interpretación del señor diputado.

Sr. Albrieu. — Es la interpretación del artículo 2º.

Sr. Ravignani. — Eso no es lo que piensa el señor miembro informante de la mayoría.

Sr. Decker. — Es la interpretación que surge del artículo.

Sr. Albrieu. — Eso está en la ley: la dirección técnica del Cuerpo de Abogados dependerá del procurador del Tesoro.

Sr. Ravignani. — Yo creía que era una organismo nuevo.

Sr. Albrieu. — Es a los fines profesionales únicamente.

Sr. Ravignani. — Entonces queda entendido que depende del Ministerio de Hacienda. No es lo que ha dicho el señor miembro informante.

Sr. Díaz Colodrero. — Convendría conocer la opinión de la mayoría de la comisión...

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a votar, en particular, el artículo 1º del despacho de la comisión.

—Resulta afirmativa de 55 votos; votan 84 señores diputados.

Sr. Presidente (Guardo). — En consideración el artículo 2º.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa de 53 votos; votan 80 señores diputados.

Sr. Presidente (Guardo). — En consideración el artículo 3º.

Sr. Ravignani. — Pido la palabra.

Señor presidente: entramos aquí a la organización interna del Cuerpo de Abogados; y para después no requerir las proposiciones y consideraciones que voy a hacer, trataré de concretar este artículo 3º con otros de esta ley a los efectos de demostrar cómo ella carece técnicamente de ciertos requisitos indispensables para su clara y adecuada aplicación y que, a pesar de haber intervenido técnicos en su redacción, como se ha dicho, ya verá la Honorable Cámara que adolece de serios defectos de lógica jurídica.

En las leyes tiene que haber ordenamiento lógico, para que los magistrados que deban aplicarlas puedan comprenderlas, comenzando por una definición, en seguida por la composición del cuerpo, cosa en que estamos, las atribuciones y la forma de designar los funcionarios. Afirmando, según resultará de la concordancia

de textos, que aquí hay un desorden evidente, que las disposiciones de la materia no conservan un orden adecuado y que, además, abundan en la ley evidentes tautologías. En una ley lo peor que puede haber es la repetición de conceptos o de disposiciones que puedan traer después grave confusión en su aplicación.

Yo creo que esta ley tiene algunos defectos que deberán subsanarse. Por otra parte, a pesar de lo que dijera un señor diputado en la sesión de la mañana, en el sentido de que las leyes que integran el plan quinquenal han sido todas bien meditadas y que deberán recibir sanción, afirmo que por su estructuración los hechos demostrarán lo contrario, desde el momento que ya hay algunas leyes retiradas, sea por resolución del Senado que las devolvió al Poder Ejecutivo, lo que constituyen hechos incontrovertibles a los cuales no voy a agregar ningún comentario.

En el artículo 3º se habla de la composición del Cuerpo de Abogados. Después de haberse establecido en el artículo 2º que el Cuerpo de Abogados es dirigido por el procurador del Tesoro, en el artículo 3º se establecen dos categorías en la organización: la dirección general y las delegaciones en cada uno de los ministerios, secretarías de Estado y reparticiones administrativas de jurisdicción nacional.

En el artículo 4º se entra ya a las funciones del cuerpo, pero he aquí que más adelante, en el artículo 6º, vuelve a hablarse de la composición. Quiere decir que hay una falta de ordenamiento lógico en la estructuración de la ley.

Lo primero que debió hacer la ley es comenzar por la composición del organismo, seguir con las atribuciones y referirse después a la forma de nombramiento. En cambio, como voy a demostrarlo, después de establecer las atribuciones vuelve a hablar de la composición, lo cual revela que el autor del proyecto ha trabajado rápida e improvisadamente. No hay un criterio maduro. Como dice aquel gran escritor, hay que tener tiempo para ser breve. Parece que en este caso se ha dispuesto de poco tiempo para preparar una ley breve, concisa y orgánica.

En el artículo 6º se advierte una cosa muy pintoresca. Dice: «La dirección general estará compuesta de los siguientes organismos: a) dirección General...» Esa repetición revela una manera un poco infantil y primitiva de redacción de la ley.

Después de enunciar, en el inciso b) del artículo 6º, a la inspección de delegaciones, resulta que hay que volver al artículo 3º para saber que existen delegaciones. En realidad, el organismo está integrado por la dirección general, que comprende la inspección de delegaciones y las delegaciones en los ministerios, establecidas en los diversos artículos, en forma salteada. Hay,

pues, defectos de lógica jurídica, repito, en la disposición de la materia de la ley.

Para no fatigar a la Honorable Cámara, en el momento de considerar en particular el artículo 4º, mostraré las repeticiones y superposiciones de expresión, existentes entre ese artículo y algún otro que habla de organización.

Además, el artículo 6º que establece que la dirección general estará compuesta de los organismos que a continuación indica, en el inciso c), que es enunciativo y está comprendido dentro de lo que se llama vulgarmente el sombrero del artículo, establece atribuciones. ¿Qué tienen que ver las atribuciones establecidas en el inciso c), con la organización de la dirección general, a que se refiere el concepto lógico del artículo 6º?

Sin perjuicio de reservarme algunas consideraciones sobre los artículos siguientes, para el momento de su discusión, hago notar que hay un defecto substancial de organización de la ley que puede dar lugar a confusiones. En realidad debe establecerse en el artículo 3º de la dirección general y a continuación de dicho artículo enunciar lo que comprende la dirección general, vale decir, primero el órgano cabecera y en seguida la inspección de delegaciones. Esa sería una estructuración lógica de la ley.

Sr. Visca. — ¿Qué propone?

Sr. Ravignani. — Propongo que estos dos incisos se refundan, y creo que la comisión podría al efecto darle forma. No quiero que vuelvan a comisión. Lo que deseo es que a continuación del artículo 3º, se diga: La dirección general comprenderá este organismo propiamente dicho y la inspección general de delegaciones. Nada tiene que ver el inciso c) del artículo 6º con la organización; él se refiere a atribuciones.

Sr. Presidente (Guardo). — Si ningún señor diputado desea hacer uso de la palabra respecto al artículo 3º, se va a votar.

Sr. Visca. — El señor diputado ha hablado en general de todos los artículos.

Sr. Sarraute. — ¿El señor diputado propone que el artículo 6º pase a ser 4º?

Sr. Visca. — El señor diputado no propone nada. Estamos recién en el artículo 2º.

Sr. Presidente (Guardo). — El artículo 2º ya ha sido votado. Está en consideración el artículo 3º.

Sr. Ravignani. — Propongo que se dé un ordenamiento lógico a la ley; que a continuación del artículo 3º, se diga: la dirección general estará compuesta con el número de funcionarios necesarios del cuerpo que fije la ley...

Sr. Presidente (Guardo). — Antes corresponde poner a votación el artículo 3º.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa de 55 votos; votan 80 señores diputados.

Sr. Presidente (Guardo). — ¿El señor diputado por la Capital propone que el artículo 6º pase a ser...

Sr. Ravignani. — Tan sólo los incisos a) y b), porque se refieren a organismos. El inciso c) no tiene nada que ver.

Sr. Presidente (Guardo). — Propone, entonces, el señor diputado que los incisos a) y b), del artículo 6º, pasen a ser artículo 4º.

¿Acepta la comisión?

Sr. Albrieu. — Apoyo la indicación del señor diputado; pero sin que se suprima la parte general del artículo, es decir, que el inciso c) pasaría a ser un artículo nuevo.

Sr. Ravignani. — Sí, señor.

Sr. Presidente (Guardo). — ¿La comisión acepta?

Sr. Sarraute. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a leer el artículo 4º en la forma en que quedaría redactado.

Sr. Secretario (Zavalla Carbó). — «Artículo 4º — La dirección general estará compuesta de los siguientes organismos: a) dirección general, con el número de funcionarios necesarios del cuerpo que fije la ley de presupuesto, que tendrán a su cargo la redacción de instrucciones generales, contestación de las consultas de las delegaciones y el patrocinio letrado de los asuntos a que se refiere el artículo anterior; b) inspección de delegaciones, que sostendrá el prestigio del cuerpo, la recta conducta y competencia de sus funcionarios y formará los tribunales calificadores para los ingresos y promociones, preparando previamente los programas correspondientes.»

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a votar el artículo 4º, tal como se ha leído.

—Resulta afirmativa de 58 votos; votan 80 señores diputados.

Sr. Ravignani. — El inciso c) debe colocarse en el ordenamiento lógico que le corresponde, después que hayamos redactado el artículo de las atribuciones del cuerpo general, que es el organismo total, y pasemos luego a la dirección general.

Sr. Albrieu. — En el artículo que aprobamos debe introducirse una reforma. El inciso a) del artículo 6º del despacho dice: «... y el patrocinio letrado de los asuntos a que se refiere el artículo anterior». Debe decir: «... y el patrocinio letrado de los asuntos a que se refiere el artículo 6º», que es el artículo 5º del despacho.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Guardo). — Habiendo asentimiento, se redactará el artículo 4º en la forma que indica el señor diputado por La Rioja.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º de la Honorable Cámara, don Silverio Pontieri.

Sr. Presidente (Pontieri). — En consideración el artículo 4º del despacho, ahora artículo 5º.

Sr. Ravignani. — De acuerdo con el punto de vista expresado hace un instante, hago notar que, precisamente en este artículo, hay repeticiones, hay anfibologías, aspectos oscuros que hacen difícil su clara comprensión y aplicación.

Me voy a referir concretamente al inciso c) que dice: «Asesorar a las autoridades a que se hallen adscritos —se refiere a los abogados— en todo asunto en que los mismos requieran una opinión jurídica.» El inciso f) del mismo artículo dispone que deberán «asesorar sobre todo punto de interpretación legal o reglamentaria», etcétera. En realidad, una y otra cosa son lo mismo, por lo que viene a resultar una repetición absolutamente inútil.

Creo que la ley ganaría en claridad si se suprimiera en el inciso f) la expresión «sobre todo punto de interpretación legal o reglamentaria y en todo pedido de franquicias o exención de cualquier clase», etcétera, porque ya en el inciso c) está la expresión genérica: «asesorar a las autoridades —a las autoridades en toda la administración— a que se hallen adscritos, en todo asunto en que los mismos requieran una opinión jurídica».

De este modo, quedarían comprendidos los dos conceptos, el general del inciso c) y el particular con respecto a franquicia o exención de contribuciones a que se refiere el inciso f). De lo contrario, cada uno de esos conceptos podría prestarse a una peligrosa interpretación.

Sr. Presidente (Pontieri). — ¿La comisión acepta?

Sr. Sarraute. — Sí, señor presidente.

Sr. Albrieu. — Voy a sugerir una pequeña modificación al inciso c), a los efectos de evitar repeticiones. Propongo que la parte final de este inciso diga simplemente: «en todo asunto que requiera una opinión jurídica».

Sr. Ravignani. — Encuentro atinada la proposición del señor diputado.

En lo que respecta al inciso f), quedaría: «Asesorar en todo pedido de franquicia...», etcétera.

Solicito que se lean los dos incisos tal como quedarían redactados con las modificaciones propuestas, que la comisión acepta.

Sr. Secretario (Zavalla Carbó). — «Inciso c): Asesorar a las autoridades a que se hallen adscritos, en todo asunto que requiera una opinión

jurídica», «Inciso f): Asesorar en todo pedido de franquicia o exención de cualquier clase de contribuciones o impuestos y en aquellos casos en que deba decidirse sobre tributaciones que no se hallen expresamente previstos en las leyes y reglamentos.»

Sr. Presidente (Pontieri). — Se va a votar el artículo 4º del proyecto de ley, ahora artículo 5º, con las modificaciones leídas por Secretaría, respecto de los incisos c) y f).

—Resulta afirmativa de 60 votos; votan 80 señores diputados.

—En consideración el artículo 5º, que pasa a ser 6º.

Sr. Ravignani. — Pido la palabra.

La simple lectura de este artículo, como advertirán los señores diputados, puede inducir a confusión. Si lo leemos detenidamente, surgirá la duda sobre la relación lógica del lenguaje.

Me voy a permitir leer y analizar el artículo en discusión. Dice que «la dirección general como asesora del Poder Ejecutivo y las delegaciones, compondrán las asesorías de los distintos ministerios y reparticiones». Vale decir, que la dirección general asesora al Poder Ejecutivo; y las delegaciones, todas juntas, ¿son asesoras de los distintos ministerios y reparticiones? La dirección general, ¿asesora también a las reparticiones y ministerios?

Sr. Baulina. — De esta suerte se extienden las funciones del procurador general del Tesoro.

Sr. Albrieu. — El es quien fija el criterio definitivo; de tal manera que su asesoramiento final ha de servir también como asesoramiento de las distintas reparticiones.

Sr. Ravignani. — Sigamos adelante. Dice el artículo: «pero estas últimas deberán supeditar su acción...» ¿Quiénes son «estas últimas», las reparticiones o las delegaciones?

Sr. Albrieu. — Las delegaciones.

Sr. Ravignani. — Entonces, no está bien redactado el artículo.

Sr. Albrieu. — En lugar de «estas últimas», deberá decir «las delegaciones».

Sr. Ravignani. — Así, sí. Que se corrija, entonces, la redacción.

Sr. Presidente (Pontieri). — ¿Acepta la comisión la proposición del señor diputado?

Sr. Sarraute. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Pontieri). — Se va a votar el artículo con la modificación aceptada.

—Resulta afirmativa de 61 votos; votan 82 señores diputados.

Sr. Ravignani. — Ahora, señor presidente, hay que agregar un artículo, que era el inciso c), del artículo 6º del despacho. Lo hemos reservado para el ordenamiento lógico, y corresponde agregarlo aquí.

Sr. Presidente (Pontieri). — Así lo iba a enunciar la Presidencia. Sería el artículo 7º, que se va a leer.

Sr. Secretario (Zavalla Carbó). — Artículo 7º:

La dirección general bajo el ordenamiento del procurador del Tesoro podrá actuar como oficina técnica de derecho administrativo y de lo contencioso del Estado y se expedirá sobre todo proyecto de modificación o creación de normas legales o reglamentarias. Cuidará en tal sentido de que las delegaciones propongan las reformas que la realidad práctica aconseje.

Sr. Presidente (Pontieri). — ¿Acepta la comisión este nuevo ordenamiento?

Sr. Sarraute. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Pontieri). — Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. Díaz Colodrero. — Este inciso que estamos considerando ahora como artículo 7º es lo más novedoso de la ley. Aquí dice: «La dirección general, bajo el ordenamiento del procurador del Tesoro...» ¿Qué quiere decir el vocablo ordenamiento? Luego dice que podrá actuar como oficina técnica de derecho administrativo y de lo contencioso del Estado y se expedirá sobre todo proyecto de modificación o creación de normas legales o reglamentarias. ¿Sobre qué proyectos?

Sr. Albrieu. — Los que mande el Poder Ejecutivo.

Sr. Díaz Colodrero. — Pero no lo dice. Esto es de lo más confuso. ¿Y qué significa el ordenamiento del procurador del Tesoro?

Sr. Albrieu. — Bajo la orden, bajo la dirección. Es un término castizo.

Sr. Presidente (Pontieri). — Se va a votar el artículo 7º leído por Secretaría.

—Resulta afirmativa de 57 votos; votan 80 señores diputados.

—En consideración el artículo 7º del despacho, ahora artículo 8º.

Sr. Presidente (Pontieri). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Ravignani. — Señor presidente: Estoy realmente sorprendido de este artículo, por el que se crea una especie de contubernio administrativo, diría, inconcebible en un ordenamien-

to del Estado, porque será muy difícil establecer la línea divisoria entre la disciplina y el asesoramiento técnico.

A poco que se medite se advertirá que este artículo será motivo de continuos conflictos dentro de la administración porque las delegaciones dependen disciplinariamente del organismo administrativo al que se hallen adscritas, pero del punto de vista estrictamente profesional dependerán de la dirección general.

Hay que considerar la categoría de los funcionarios. Los abogados asesores ¿qué problema de disciplina pueden tener sino aquellos que surgen inherentemente de su función de asesoramiento? ¿Desde dónde se puede establecer la línea divisoria entre la disciplina y el asesoramiento? Precisamente a veces puede interpretarse que una forma de asesoramiento sea una falta de disciplina, como cuando no satisface al jefe de la repartición que en último caso puede ser el ministro del ramo.

Me permito hacer notar que este artículo 79 concuerda con el artículo 16 según el cual estos funcionarios, abogados del Estado, son de prestado y en un momento determinado el jefe de la repartición o el ministro no podrá disponer de ellos como fuese necesario. Advuértase lo que dispone el artículo 16: «Los abogados del Estado podrán ser trasladados de una repartición a otra por necesidades de servicio o cuando lo disponga la dirección general para la mejor formación profesional de los funcionarios del cuerpo.» De modo que el ministro tiene su asesor delegado, que está en la oficina y que depende de él disciplinariamente; incurre en una falta en un momento determinado y se dicta cualquier medida de orden disciplinario; pero la dirección general lo traslada, y se termina la situación.

Yo creo que todo el artículo 79 es una incongruencia desde el punto de vista de la ordenación administrativa.

Dejo salvada así mi opinión.

Sr. Presidente (Pontieri). — Tiene la palabra el señor diputado por La Rioja.

Sr. Albrieu. — Indudablemente esta ley es novedosa en nuestra legislación. Se tiende a unificar la administración en lo jurídico, como es uno el fin jurídico del Estado. De tal modo que comenzamos con esta ley a dar la base de orden técnico profesional con la dirección general. A ese solo efecto, los señores abogados pertenecen a la dirección general del Cuerpo de Abogados del Estado. Disciplinaria y administrativamente, dependen del ministerio al cual se hallen adscritos para todo lo que sea concurrencia al cumplimiento de sus funciones, licencias, cobro de honorarios o de sueldos...

Sr. Ravignani. — Menos traslados.

Sr. Albrieu. — Traslados también, señor diputado; es la administración la que los tras-

lada, de acuerdo a los informes que suministre la dirección general del Cuerpo de Abogados.

Por supuesto que el límite de las atribuciones de la repartición en la cual se encuentren adscritos será materia de la reglamentación que en el caso podrá hacer casuística. En verdad, la limitación está en que el cuerpo jurídico del Estado sólo tiene vigencia, sólo existe a los fines profesionales de orientación técnica, pero no a los fines administrativos.

Sr. Ravignani. — Pido la palabra.

Considero, señor presidente, que si realmente se hubiera querido establecer una organización como la que estamos estudiando, todo el cuerpo jurídico del Estado tendría que ser instituido como una sola entidad, sin delegación en las reparticiones públicas. El Cuerpo de Abogados del Estado ha de ser una entidad administrativa a la cual se remitan, por vía de consulta, los expedientes y casos de orden jurídico para que sobre ellos se expida. Pero determinar la dependencia disciplinaria de los funcionarios, por un lado y establecer su dependencia técnica, por otro, repito, es introducir confusión en la administración pública.

De paso quiero hacer notar —ya lo ha dicho con mucho fundamento el señor miembro informante de la minoría y también otro integrante de nuestro sector— que en el ordenamiento administrativo de los ministerios se encuentran perfectamente delimitadas las atribuciones de cada uno de ellos, siendo los ministros responsables de sus respectivos departamentos. Creo, además, que con esto se invaden atribuciones de índole constitucional. Este asunto es muy delicado, porque estamos saliéndonos —y éste es el *substractum* institucional que se desprende del proyecto—, del ordenamiento republicano, para ir hacia una omnipotencia administrativa del Estado, sin ordenamiento constitucional, de tipo germánico. Esta es la realidad: él está inficionado de espíritu germánico, de principios que no conciden con el régimen republicano y democrático de gobierno, en virtud de los cuales se establece, en primer término, la división de los poderes y, en segundo, dentro del mismo Poder Ejecutivo, la división en ministerios donde cada ministro es responsable de su departamento.

Precisamente quería insistir que estamos vulnerando el sistema de nuestra organización republicana de gobierno.

Nada más.

Sr. Sarraute. — Pido la palabra.

Creo que esta disposición no presenta dificultad alguna, ya que la corrección disciplinaria que queda a cargo del respectivo ministro está de acuerdo con las disposiciones de la estructura que se determina. Por este proyecto de ley se ha querido mantener la dependencia administrativa de los funcionarios, y por ello se

establece la corrección disciplinaria a cargo del ministro del cual dependen los funcionarios.

En cuanto a lo que manifiesta el señor diputado por la Capital, en el sentido de que esta disposición está impregnada de espíritu germánico y de que atenta contra la división de los poderes establecida en nuestro régimen democrático de gobierno, contrariamente a lo que afirma, la ley misma le está dando la negativa.

Por ella se está manteniendo el sistema de la división de los poderes, por cuanto respecto de la dependencia administrativa subsiste la relación del funcionario, que desempeña tareas en la entidad a crearse, del respectivo ministro, del cual no se lo separa. Se sigue manteniendo la dependencia ministerial; lo único que se crea es la vinculación profesional de todos los entes que actualmente están separados en distintas reparticiones, para que en forma eficiente y con unidad de criterio puedan defender mejor los intereses del pueblo.

Nada más.

Sr. Baulina. — Pido la palabra.

Debo insistir, señor presidente, en las consideraciones que ha formulado mi compañero de sector, doctor Ravignani. Por ello, solicito a la Honorable Cámara que observe la contradicción existente entre la segunda y la primera parte de este artículo.

En primer término, él se refiere a las delegaciones que este Cuerpo de Abogados del Estado mantendrá en los distintos ministerios y reparticiones autárquicas —es decir, a algo establecido desde el comienzo—, y, en segundo, se dice que a tal efecto —a los efectos de las delegaciones—, los departamentos del Estado solicitarán de la dirección general el número de funcionarios del cuerpo que según su organización sea necesario.

Entiendo que la organización de las distintas secretarías de Estado y de las reparticiones autárquicas resulta de las respectivas leyes orgánicas, cuando existen, y de la ley de presupuesto, que por algo se llama ley de las leyes.

Aquí, de acuerdo a este artículo, pareciera decir —no me atrevo a afirmar que lo diga— que a pesar de las delegaciones, los distintos departamentos del Estado podrán solicitar prestados los abogados que estime necesarios en un momento dado.

Es evidente que en el conjunto de esta ley, y especialmente en este artículo, aflora algo que puede ser una modalidad de la nueva estructuración administrativa que no tiene por base ya la Constitución, porque se crea un conjunto de instituciones que no encajan en nuestra tradición constitucional y administrativa. Diría que se hace una organización administrativa deliberadamente invertebrada, excesivamente flexible y que se sale de las normas clásicas para permitir actuar en cierto modo al margen de la

misma Constitución. Por eso, la objeción que se hacía antes respecto a la dependencia que debe tener este cuerpo, viene a reflejarse en el artículo 6º, porque la acción, la distribución del personal del cuerpo de abogados, resulta aquí algo fluctuante, incierto, eventual, que ha de ocasionar, como digo, toda clase de dificultades, que son frecuentes en el orden administrativo, porque bien sabemos del espíritu tradicional de toda la administración al expandirse, a guardar celosamente sus fueros y a promover cuestiones de toda índole, y algunas veces hasta de protocolo.

Yo creo que este artículo está de más, pues los otros ya han establecido las funciones de ese cuerpo de abogados. Su permanencia dentro de la sanción de la Honorable Cámara dará por resultado perturbaciones que no hacen a la finalidad del proyecto y que posiblemente conspirarán contra la eficacia de la ley.

Sr. Presidente (Pontieri). — Tiene la palabra el señor diputado por La Rioja.

Sr. Albrieu. — Agradecidos y complacidos habíamos aceptado de buena fe el ofrecimiento de colaboración hecho por el señor diputado Ravignani...

Sr. Ravignani. — Es de buena fe.

Sr. Albrieu. — ... pero resulta, señor presidente, que no puede ser considerado de tal manera cuando viene la obligada referencia a una unificación o a un régimen germánico en una ley que nada tiene que ver con ello.

Sr. Ravignani. — ¿Y eso es mala fe?

Sr. Albrieu. — Creemos que es una referencia política desgraciada, dado el motivo que se toma como base. Estamos tratando de hacer una buena ley que unifique el criterio jurídico del Estado. Eso no puede ser tenido por malo, cualquiera sea el país o el régimen en base al cual se lo ha de conseguir.

Nosotros hemos tratado de unificar la interpretación de nuestra Constitución, aun más, se ha conseguido la unificación de la interpretación constitucional; igualmente, debemos también dar al Estado una unificación en vista a lo contencioso-administrativo, concorde con la modalidad política de nuestro Estado. Pero nunca ello puede ser relacionado con ningún país germánico o con algún país totalitario por esa sola circunstancia; no se debe relacionar esa situación en el orden técnico por el hecho de que Alemania o Italia, el nazismo o el fascismo, haya dado preeminencia al aspecto técnico, pues bien sabemos que Rusia, Estados Unidos e Inglaterra y todos los países de alta civilización han dado preeminencia también a lo técnico.

Estamos tratando con este proyecto, simplemente, de tener una sola orientación jurídica en la administración, pero eso no quiere decir que nosotros hagamos una cosa que salga de nuestra Constitución. En ese caso sería lo mismo pensar

que se sale de la Constitución nacional cuando un juez de comercio o un superior tribunal de justicia eleva, a petición de parte, un juicio para la interpretación constitucional, planteando el caso federal a la Corte Suprema. Lo que se trata es de unificar el criterio de interpretación. No nos anima otro propósito y debemos advertir a los señores diputados que somos tan celosos como ellos en el cumplimiento de la Constitución. Nosotros vamos con el progreso. Si las circunstancias imponen una nueva modalidad impuesta por el progreso debemos aceptarla, pero ello no significa de ningún modo que nosotros estemos en contra de la Constitución, pues, como he dicho, somos tan celosos en su cumplimiento como los señores diputados de la oposición.

Sr. Ravignani. — Pido la palabra.

No voy a hacer una cuestión reglamentaria al señor diputado por la imputación que me ha hecho con respecto a la palabra que yo pronunciara.

Sr. Albrieu. — Me ha interpretado mal el señor diputado...

Sr. Ravignani. — Lo he interpretado muy bien y el señor diputado lo ha aclarado.

Intervengo en este debate con la autoridad de legislador, con la libertad de opinión necesaria para juzgar los distintos aspectos de la ley. Si no coincido con los puntos de vista del señor diputado, no quiere decir que uno u otro carezcamos de buena fe. Ambos podemos tener buena fe e interpretar con nuestra respectiva ciencia y conciencia, con espíritu de respeto a la Constitución, juzgando con entera objetividad el articulado de la misma. Si entendiera que ésa es la interpretación y la callara, no cumpliría con mi mandato.

No vengo aquí a hacer una cuestión inspirada por una mala fe, ni baladí, sino una seria cuestión constitucional, pues no me negará el señor diputado que en muchos artículos del plan quinquenal existen disposiciones que tendremos ocasión de discutir, que repugnan al sistema republicano.

Cuando hago las manifestaciones que la Cámara ha escuchado, procedo dentro de una ortodoxia constitucional, con la buena fe que siempre debe tener un legislador que cumple con un mandato constitucional.

Por estas razones no puedo aceptar la imputación de mala fe que hace el señor diputado. Me conoce el señor diputado y sabe que si tomo participación activa en el debate es en defensa de los intereses generales del país.

Sr. Albrieu. — He dicho que creíamos de buena fe que el señor diputado venía a colaborar con este proyecto. Yo no he imputado mala fe al señor diputado.

Sr. Ravignani. — Si un señor diputado hace presente a la Cámara que un artículo importa

un peligro, no puede decirse que no procede de buena fe.

Sr. Albrieu. — La obligada desviación al «terreno germánico» que ha hecho el señor diputado no puedo aceptarla, ni personalmente ni en nombre de mi bloque, porque involucra una apreciación de carácter político inexacta.

Sr. Presidente (Pontieri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Bagnasco. — Señor presidente: creo que estamos en un círculo vicioso. Tratamos el artículo de una ley que, según opinión del diputado de la minoría, es una de las cosas buenas del plan quinquenal. Por eso, yo voy a llamar a la realidad a mis colegas, pidiéndoles que terminemos con este artículo. Las incursiones a la Constitución y al campo germánico, tienen indiscutiblemente interés político, pero hacen perder eficacia legislativa.

Sr. Ravignani. — Se trata de alta política.

Sr. Bagnasco. — Entrando al artículo en discusión, el único defecto que le encuentro al despacho de la comisión es la palabra «disciplinariamente». La intención que se ha tenido, según surge de la redacción de este artículo, es la de establecer precisamente una separación entre lo que puede llamarse la parte administrativa y el deseo de obtener por encima de ella un criterio jurídico unificado, en lo relacionado con la interpretación de las cuestiones de derecho por los profesionales que defienden al Estado. En consecuencia, el artículo debería redactarse en esta forma: «Las delegaciones se organizarán de acuerdo con las necesidades del organismo administrativo a que se hallen adscritas y dependerán, administrativamente, de este último, sin perjuicio de su dependencia de la dirección general», etcétera, continuando el artículo tal cual aparece redactado. Se subsanarían, así, a mi juicio, los inconvenientes que ha señalado la minoría.

Sr. Presidente (Pontieri). — ¿Acepta la comisión el cambio de términos?

Sr. Sarraute. — Acepta la comisión el cambio del término «disciplinariamente», por «administrativamente», como se propone.

Sr. Presidente (Pontieri). — Se va a votar el artículo 7º del despacho, que pasa a ser 8º, con la modificación aceptada por la comisión.

— Resulta afirmativa de 58 votos; votan 80 señores diputados.

— En consideración el artículo 8º, que pasa a ser 9º.

Sr. Díaz Colodrero. — Pido la palabra.

No deseo reproducir la discusión que se produjo hace un instante sobre si esta ley está inficionada de espíritu extranjero, germánico, pero nadie me negará que aparece en este artículo una expresión que no pertenece a nuestro len-

guaje administrativo. La expresión «concurso oposición» es de indudable raigambre española.

Es sabido que bajo el gobierno de Primo de Rivera fué cuando en España se organizó el sistema de llegar a los cargos públicos por medio de la llamada oposición. El primorriverismo de la expresión introducida no puede ser negado entonces.

La expresión que conocemos, la que existe en nuestras leyes, es la de «concurso». Por ello propongo que en las disposiciones de esta ley suprimamos esa expresión foránea «oposición».

Sr. Rumbo. — ¿Cómo foránea? ¡Si es castellana!

Sr. Vischi. — ¿Es alemán ese término?

Sr. Díaz Colodrero. — Es de Primo de Rivera, que organizó el sistema de las oposiciones en España.

Sr. Rumbo. — Es del rico romance. Es una expresión magnífica.

Sr. Rojas (A.). — No vamos a volver al lenguaje de Las Partidas.

Sr. Vischi. — Ahí debe haber algún profesor de castellano.

Sr. Rumbo. — Quizá sea considerado un germanismo por algún señor diputado...

Sr. Dellepiane. — En el fondo, podría ser el idioma de la CADE, porque creo que el señor Figuerola ha tenido sus vinculaciones con ella, como así también el señor Lasaleta y otros en-cumbrados personajes palatinos.

Sr. Albrieu. — Mejor no toquemos la CADE.

Sr. Presidente (Pontieri). — Ruego a los señores diputados que no dialoguen.

Sr. Ravignani. — Me permito invitar a los señores diputados a que suprimamos esta palabra «oposición». En el lenguaje argentino, en la práctica, usamos la palabra «concurso». Después vendrá la parte reglamentaria, como ha dicho muy bien el señor diputado; se establecerán los recaudos correspondientes para el concurso, títulos, antecedentes, carrera, etcétera. Teniendo la palabra «concurso» aceptada desde hace muchos años, ¿para qué recurrir, señor presidente, a modalidades que serán de buen romance? La expresión romance, señor diputado Rumbo, se aplicará a las costumbres hispánicas, nosotros tenemos expresiones argentinas, con las que nos entendemos muy bien y con las que debemos seguir. En romance hay muchas palabras que resultarían ridículas si las empleáramos en el lenguaje nacional.

Sr. Rumbo. — Efectivamente, pero no es una palabra foránea, porque entonces nosotros hablaríamos un idioma foráneo, lo que no es, por cierto, aceptable.

Sr. Dellepiane. — Entre los romances que podemos aceptar está el de Ruy Díaz de Vivar, como un homenaje a nuestro distinguido colega de la mayoría. (Risas.)

Sr. Ravignani. — Si ponemos la palabra oposición, podría ser ésta de amplios alcances, como

se la considera en España cuando se hace, por ejemplo, las oposiciones para optar a cátedras, etcétera, que, en realidad, no están dentro de las costumbres argentinas.

Por eso me permito sugerir a los señores diputados de la mayoría que acepten la supresión del término, y haremos así una ley más argentina.

Sr. Presidente (Pontieri). — Tiene la palabra el señor diputado por La Rioja.

Sr. Albrieu. — En realidad, señor presidente, no ha estado en nuestras modalidades ni en nuestras leyes las palabras «concurso de oposición» o «concurso oposición», como dice el proyecto, pero la expresión es castiza, y ha entrado en uso. La primera vez que yo la he visto y he indagado lo que quiere decir, ha sido en una reglamentación que no era de Primo de Rivera, sino estableciendo las condiciones para entrar a la docencia en el país y firmado por el ministro Rothe, seguramente de un gobierno primorriverano, de acuerdo a lo expresado por el señor diputado.

Pero vamos a aceptar la indicación de los señores diputados de la minoría y pondremos solamente la palabra argentina «concurso».

Sr. Presidente (Pontieri). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Sarraute. — Sí, señor presidente.

Sr. Rumbo. — Yo me opongo personalmente.

Sr. Candioti. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pontieri). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Candioti. — Deseo pedir al señor miembro informante me aclare una duda.

Dice el despacho que para ingresar al Cuerpo de Abogados del Estado, se deberá realizar un concurso en que demuestre el aspirante, además de conceptos generales del derecho, ¿qué sabe el abogado? ¿Cómo es posible que un abogado intervenga en un concurso para demostrar que tiene conocimientos generales de derecho?

Sr. Vischi. — Para que demuestre que no es un simple picapleitos.

Sr. Candioti. — Me parece una redundancia inútil. Que se haga un concurso de acuerdo con la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo, pero no para que un abogado demuestre tener conocimientos generales de derecho. El abogado debe tener profundos conocimientos de derecho.

Sr. Presidente (Pontieri). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Bustos Fierro. — He pedido la palabra para significar que mi voto será por el mantenimiento de la expresión «concurso de oposición».

La expresión «concurso de oposición» califica conceptual y metodológicamente...

Varios señores diputados. — ¡Ah! ¡Ah!

Sr. Bustos Fierro. — ...el tipo de concurso.

La supina ignorancia de los señores diputados que se rien, explica perfectamente esa ridícula

reacción que tienen frente a lo que estoy expresando.

Digo que la palabra «oposición» califica a «concurso», porque éste puede ser realizado de distintas maneras. Mucho me extraña que el señor diputado Ravignani, que ha sido director del Instituto de Investigaciones Históricas y ha tenido, por lo tanto, repetidas ocasiones de asistir a distintas clases de concursos de oposición o de títulos, o de antecedentes, manifieste que la sola enunciación de «concurso» sea suficiente.

El concurso de oposición está incorporado como sistema de admisión a organismos que requieren que la idoneidad quede ampliamente demostrada en un certamen determinado. Está incorporado a todas las prácticas docentes y científicas del país y podríamos traer centenares de ejemplos que prueban que la expresión ni es foránea ni es inadecuada.

Por estas razones voy a votar, individualmente, por el mantenimiento de esa expresión que a mi juicio califica perfectamente el sentido del concurso, a que se aspira sin perjuicio de que la reglamentación del Poder Ejecutivo pueda establecer todas aquellas medidas conducentes a que el concurso sea más perfecto y los funcionarios que de él emerjan sean más idóneos.

Mientras tanto, invito a los señores diputados que no participen de este criterio, a informarse un poco más antes de pretender zaherir el juicio de un colega que no se ha conducido nunca con jactancia, pero que está siempre presto a cotejarse con ellos.

Sr. Presidente (Pontieri). — Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Sarraute. — La mayoría de la comisión considera que no se debe hacer cuestión por una palabra, y por eso es que anteriormente he manifestado que aceptaba la exclusión del término «oposición».

En cuanto a la aclaración que pide el señor diputado Candiotti, debo manifestar que en este artículo 8º, se presume que el abogado tiene conocimientos generales de derecho, tal lo expresa al contener la palabra «además», y por ello, además de esos conocimientos generales, se le exigen conocimientos suficientes de derecho administrativo y organización del Estado. Esto es únicamente lo que se exige al aspirante, porque lo otro se da por entendido.

Sr. Ravignani. — Como he sido aludido personalmente, voy a decir dos palabras.

En todos los estatutos y reglamentaciones universitarias, la expresión que se usa es «concurso». Dentro de las prácticas nacionales, en la palabra «concurso» van incluidos todos los procedimientos, a los efectos de la selección.

Si escarbáramos a fondo, veríamos que «concurso» y «oposición» quieren decir lo mismo.

Sr. Bustos Fierro. — No. Concurso quiere decir certamen. Oposición es el método o forma

mediante el cual el concurso se realiza. La oposición puede ser de mera presentación de títulos.

Sr. Ravignani. — Es una selección entre varios.

Sr. Rumbo. — No es selección, sino concurso de oposición...

Sr. Bustos Fierro. — La oposición de títulos, de méritos, etcétera, es concurso.

Sr. Ravignani. — Que aclare la mayoría.

Sr. Presidente (Pontieri). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Candiotti. — Las explicaciones que ha dado el señor miembro informante no son suficientes.

El artículo en discusión dice que el aspirante debe tener, además de los conocimientos generales de derecho, conocimientos «suficientes» de derecho administrativo y organización del Estado. Entiendo que el candidato debe dominar la materia administrativa, y, por tanto, no debe tener sólo conocimientos suficientes, superficiales.

Con el fin de que la administración cuente con personal capacitado para el desempeño de las tareas asignadas, propongo reemplazar el término «suficiente» por «profundos» y «especializados». Espero que la mayoría de la comisión acepte mi sugerencia, en el sentido de que, además, el concurso sea reglamentado por el Poder Ejecutivo.

El artículo podría quedar redactado de esta manera: «El ingreso a ella sólo podrá tener lugar mediante concurso, conforme a la reglamentación que al efecto dicte el Poder Ejecutivo...», etcétera.

Sr. Vischi. — Queda peor que antes...

Sr. Sarraute. — La comisión acepta solamente el cambio de la palabra «suficiente» por «profundos», basándose en que en el orden del día, por un error, aparece aquel término, ya que en el proyecto incluido en el plan quinquenal, este artículo emplea la expresión «conocimientos profundos».

Sr. Albricu. — El señor diputado por la Capital coincide, pues, con el plan quinquenal. (Risas.)

Sr. Vischi. — No le hable del plan quinquenal, porque le da fiebre.

Sr. Presidente (Pontieri). — Se va a votar el artículo 8º, ahora 9º, con las modificaciones aceptadas por la comisión.

Sr. Díaz Colodrero. — ¿Cómo quedaría?

Sr. Presidente (Pontieri). — Se va a leer por Secretaría.

Sr. Secretario (Zavalla Carbó). — «Artículo 9º.—El Cuerpo de Abogados del Estado se constituirá como una carrera especial dentro de la administración, con su escalafón propio. El ingreso a ella sólo podrá tener lugar mediante concurso que demuestre en el aspirante, ade-

más de los conocimientos generales de derecho, conocimientos profundos de derecho administrativo y organización del Estado. Las promociones se harán respetando rigurosamente el orden jerárquico y siempre con informe favorable de la inspección.»

Sr. Presidente (Pontieri). — Se va a votar.

—Resulta afirmativa de 53 votos; votan 80 señores diputados.

Sr. Presidente (Pontieri). — En discusión el artículo 9º, que pasa a ser artículo 10.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa de 58 votos; votan 80 señores diputados.

—En discusión el artículo 10, que pasa a ser 11.

Sr. Presidente (Pontieri). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Ravignani. — Este artículo 10, ahora 11, me parece que está repetido en el artículo 18, porque es el mismo concepto de la selección en los actuales organismos. El artículo 10 dispone que para la formación del cuerpo se tendrá en cuenta la constitución actual de las asesorías letradas de los actuales organismos eligiendo a los funcionarios que desempeñen función específica para la que se precise el título de abogado; y en el artículo 18 se dice que la dirección central del cuerpo seleccionará los funcionarios que actualmente presten servicio, inclusive sometiendo a concurso oposición. En realidad viene a ser lo mismo.

Sr. Sarraute. — Se establece una diferencia en el artículo 10 del despacho.

Sr. Ravignani. — Quiero dejar establecido este principio: que se respete la estabilidad del empleado.

Sr. Presidente (Pontieri). — Se va a votar el artículo 10, que pasa a ser artículo 11.

—Resulta afirmativa de 58 votos, votan 80 señores diputados.

Sr. Presidente (Pontieri). — En consideración el artículo 11; que pasa a ser artículo 12.

Si no se hace uso de la palabra se va a votar.

—Se vota y resulta afirmativa de 58 votos; votan 80 señores diputados.

—En consideración el artículo 12, que pasa a ser artículo 13.

Sr. Presidente (Pontieri). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Ravignani. — En este artículo se dice que: «se llamará a concurso oposición». Hay que suprimir la palabra «oposición».

Sr. Presidente (Pontieri). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Albrieu. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Pontieri). — Se va a votar el artículo 12, que pasa a ser artículo 13, con la supresión de la palabra «posición».

—Resulta afirmativa de 56 votos; votan 80 señores diputados.

—En consideración el artículo 13, que ahora pasa a ser 14.

Sr. Presidente (Pontieri). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. López Serrot. — Yo deseo que alguno de los miembros de la comisión respectiva me informe qué alcance dan al inciso 4º de este artículo 13, cuando dice: «informes de conducta dimanados de las autoridades y de una investigación especial». ¿Quién practicará esta investigación especial? ¿De qué carácter será? ¿Qué alcance tendrá? La investigación, ¿será sobre la conducta pública o sobre la vida privada del abogado? En una palabra, conviene que quede perfectamente aclarado qué se entiende por investigación especial ya que esta disposición puede ser un arma peligrosa, según sea quien la esgrima en el momento de efectuarse las presentaciones para el ingreso al Cuerpo de Abogados del Estado.

Sr. Presidente (Pontieri). — Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Sarraute. — En principio, se establece que la realización de la selección de los aspirantes se sujetará a la investigación a que se refiere el proyecto de ley. Con relación a la investigación especial que se menciona en este inciso 4º, se sobreentiende que se refiere únicamente a su actuación en la vida pública, pero de ninguna manera a su vida privada. Se investigará únicamente sus antecedentes personales. Los informes que se requerirán se refieren al de las autoridades donde el aspirante haya prestado servicios. Indudablemente, en las reparticiones donde anteriormente se desempeñó el aspirante, aunque sea en otras funciones, deben existir constancias sobre su actuación, en el sentido de si ha cometido delito o no, o si en alguna oportunidad ha merecido alguna corrección disciplinaria. Estos informes no pueden referirse, como he dicho, al aspecto privado.

Sr. Presidente (Pontieri). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. López Serrot. — Ante las manifestaciones del señor miembro informante de la mayoría de la comisión, quiero manifestar que votaré en contra de este inciso. Así lo haré, por cuanto tengo fe en los informes que dimanan de las autoridades pertinentes.

Además, me asalta una profunda preocupación, en cuanto a la incorporación de una

norma que no determina, en forma concreta, a cargo de quién se encontrará la investigación especial que se establece por este inciso. Tampoco se determina cuál será la investigación que merecerá el calificativo de especial, y cómo habrán de hacerla las autoridades que apliquen esta disposición en el momento de seleccionar los aspirantes al Cuerpo de Abogados del Estado.

Sin abrir el fuego del debate político, quiero expresar que al dar mi voto adverso a la incorporación de estas pocas palabras del inciso 4º del artículo que estamos considerando, me baso en el hecho públicamente conocido —y deseo evitar que ello ocurra con los colegas que, con la frente alta y para servir al país, deseen incorporarse al cuerpo que estamos ordenando jurídicamente en este momento—, de que existen disposiciones fuera de la ley, pero de carácter obligatorio en la administración pública, en virtud de las cuales, a quien pretende ingresar en ella se le somete a una investigación sobre su persona y autoridad política, que posiblemente sea la especial a que se refiere este inciso. Por ella se llega hasta a la grosería de exigir, señor presidente, que en las fichas solicitando empleo, firme también un miembro del partido que hoy se llama Peronista, a manera de fiador del aspirante al empleo público.

Deseo, para los colegas que se encuentren libres de estas preocupaciones y de que un poder público, el de hoy o el de mañana, pueda realizar una investigación de los alcances de los que actualmente se realizan en la administración pública sobre cada uno de los aspirantes, me acompañen en la oposición que he planteado.

Nada más.

Sr. Ravignani. — Al final del artículo 13 dice: «no hallarse en quiebra ni en concurso». Propondría que después de la palabra concurso, se agregara «civil».

Sr. Presidente (Pontieri). — Se va a votar.

Sr. López Serrot. — Voy a solicitar que se vote primero hasta la palabra «autoridades», del inciso 4º, para luego resolver sobre el resto.

Sr. Albrieu. — Pido la palabra.

Debo decirle al señor diputado por la Capital que estas exigencias del artículo 13 del despacho, no responden a una finalidad política sino al propósito de velar por el buen concepto y la moral de los integrantes del Cuerpo de Abogados. Creo que el señor diputado sería el primero en impugnar, en hacer pública protesta en esta Cámara, si se designase a un abogado sin tener determinados requisitos como, por ejemplo, el caso de que fuera nombrado como abogado del Estado, a un abogado de empresas extranjeras.

Sr. López Serrot. — El inciso 4º, establece que para el ingreso se requieren informes de conducta dimanados de las autoridades.

Sr. Albrieu. — Suponga el señor diputado que hubiera sospechas, más o menos fundadas, con-

tra un abogado. En ese caso no podría pertenecer al cuerpo de servicio del Estado. Podría haber un sumario del cual no resultase fehacientemente una prueba terminante, pero puede haber una sospecha más o menos notoria. Para el Estado sería mejor no incorporar a ese profesional a su Cuerpo de Abogados.

Sr. López Serrot. — No se califica la investigación.

Sr. Albrieu. — Eso será facultad del Poder Ejecutivo al reglamentar la ley.

Sr. Presidente (Pontieri). — ¿Acepta la comisión el agregado de la palabra «civil» al final del artículo?

Sr. Sarraute. — Entiendo que no es necesario, señor presidente. En el artículo se habla de quiebra y concurso. Hay dos clases de concursos: comercial y civil. Al decirse quiebra se refiere al concurso comercial. En consecuencia, debe entenderse que cuando se habla de concurso se refiere al civil.

Sr. Presidente (Pontieri). — Se va a votar el artículo 13 del despacho, que pasa a ser artículo 14.

—Se vota y resulta afirmativa de 53 votos; votan 81 señores diputados.

Sr. Presidente (Pontieri). — En consideración el artículo 14, que pasa a ser 15.

Se va a votar, con la supresión de la palabra «oposición» de acuerdo con lo resuelto por la Honorable Cámara.

Se vota y resulta afirmativa de 54 votos; votan 80 señores diputados.

—En consideración el artículo 15, que pasa a ser 16.

Sr. Presidente (Pontieri). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Ravignani. — Quiero hacer notar que estoy de acuerdo con esta disposición, porque establece el respeto a la selección del Cuerpo de Abogados. Lo digo después de las expresiones vertidas ayer por el señor ministro de Relaciones Exteriores y por el señor presidente de la República en distintas oportunidades, según las cuales el presidente es el que nombra y remueve a los funcionarios de la administración, de acuerdo con la facultad constitucional.

No voy a discutir el problema para no desviarme del asunto, pero me felicito de que en una ley existan los recaudos suficientes de concurso y de procedimiento para nombrar en la administración los hombres idóneos, de acuerdo con el requisito constitucional; y espero para bien de la administración que el sistema sea respetado.

Sr. Candiotti. — Pido la palabra.

Pediría al señor miembro informante una aclaración respecto de este artículo 15, cuya redacción es poco clara. De la lectura del artículo se desprende que el Poder Ejecutivo no podría nombrar un juez, porque para ejercer esa función se requiere título de abogado.

Sr. Albrieu. — No es eso, señor diputado.

Sr. Candiotti. — Entonces, hay que decir las cosas claramente en castellano. Acá dice que «específicamente ejerza función», pero no dice a qué función se refiere.

Sr. Albrieu. — Se trata del Cuerpo de Abogados del Estado. El Poder Judicial no es una repartición pública, que es a lo que se refiere el artículo, sino un poder de tanta jerarquía como el propio Poder Ejecutivo. El artículo se refiere a «reparticiones», que es un término bien castellano.

Sr. Bustos Fierro. — Lea el artículo el señor diputado y verá cómo dice que «ninguna repartición nacional...» Habla de reparticiones nacionales y no de otros poderes del Estado.

Sr. Benítez. — Señor presidente: el artículo 1º, que delimita los alcances de esta ley, es bien claro cuando dice que se crea el Cuerpo de Abogados del Estado para las funciones de asesoramiento jurídico de la administración. De manera que toda ley está condicionada a lo dispuesto en el artículo 1º, sin que sea necesario repetir en cada artículo lo que es el límite natural de la ley.

De manera que, el castellano usado en el articulado es bien claro y su alcance está fijado por el artículo 1º.

Sr. Candiotti. — Pido la palabra.

El artículo 1º dice: «Créase el Cuerpo de Abogados del Estado. Tendrá a su cargo el asesoramiento jurídico y la defensa ante los tribunales, del Poder Ejecutivo y de todos los organismos que integran la administración».

Por otra parte, el artículo 15 dice: «Ninguna repartición nacional podrá nombrar asesor letrado ni otra clase de funcionario que específicamente ejerza función para la que precise el título de abogado...», etcétera. Nada costaría aclarar, para no dar lugar a confusiones.

Sr. Bustos Fierro. — Es una observación sin sentido...

Sr. Candiotti. — Tiene sentido.

Sr. Bustos Fierro. — ... porque está perfectamente delimitado el ámbito jurisdiccional de la ley en el artículo 1º y en el comienzo del artículo 15.

Sr. Candiotti. — No, señor; no es claro.

Sr. Sarraute. — La comisión entiende que el texto del artículo 15 es suficientemente claro, y no acepta la modificación.

Sr. Presidente (Pontieri). — Se va a pasar lista.

—Se pasa lista.

—Diputados presentes: Albrieu, Alvarez (J. D.), Alvarez (N.), Alvarez Pereyra, Alvarez Pérez, Alvarez Vocos, Arévalo Cabeza, Argaña, Arias, Bagnasco, Barreiro, Baulina, Benítez, Bertini, Bonazzola, Braga, Bustos Fierro, Calcagno, Cámara, Candiotti, Casas Noblega, Colom, Cooke, Córdova, Corvalán, Curchod, Decker, Degreef, de la Torre, del Carril, del Mazo, Dellepiane, Díaz Colodrero, Díaz de Vivar, Dufau, Fernández (B. S.), Fernández (H. S.), Ferrando, Ferrer, Frondizi, Garay, García, García Quiroga, Gericke, Giménez Vargas, Guillot, Klix López, Lareo, Lasciar, Liceaga, López Serrot, Mac Kay, Mainieri, Martínez Luque, Messina, Montes de Oca, Montiel, Mujica, Noriega, Osinalde, Peña Guzmán, Perea, Petrucci, Ponce, Pueyrredón, Raña, Ravignani, Reyes, Reynés, Rodríguez de la Torre, Rodríguez (N. M.), Rojas (N.), Rossi, Rumbo, Saravia, Sarmiento, Sarraute, Sobral, Solanet, Sustaita Seeber, Tejada, Tommasi, Toro, Uranga, Velloso Colombres, Vergara, Villafañe, Visca, Vischi, Zanon, Zara y Zinny.

Sr. Colom. — Hay diputados en las comisiones, señor presidente.

—Varios señores diputados hablan simultáneamente.

Sr. Presidente (Pontieri). — Se va a votar el artículo 15, que pasa a ser artículo 16.

—Resulta afirmativa de 59 votos; votan 89 señores diputados.

Sr. Presidente (Pontieri). — En consideración el artículo 16, que pasa a ser 17. Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Ravignani. — Me voy a permitir proponer a la comisión un agregado para armonizar un tanto el orden interno y respetar también la jerarquía disciplinaria.

Al final del artículo, después de las palabras «o cuando lo disponga la dirección general para la mejor formación profesional de los funcionarios del cuerpo», agregar, «y previa anuencia del jefe superior de la repartición». En esta forma concurre la voluntad del jefe de la repartición en el traslado del abogado. Que el jefe sepa cuándo le van a sacar un abogado de su repartición. Este movimiento no debe estar sometido a la voluntad exclusiva de la dirección general, porque en un momento determinado es posible que el jefe necesite que un abogado permanezca todavía en la repartición por dos o

tres meses, ya sea porque tenga algún trabajo especial que realizar, alguna ley general que estudiar, etcétera.

Me permito sugerir, pues, que se respete la jerarquía del jefe de repartición, que siempre será un ministro, cuya voluntad es lógico que concuerda para que se proceda al traslado de un abogado que está en ese momento, administrativamente, bajo su dependencia.

Sr. Albrieu. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pontieri). — Tiene la palabra el señor diputado por La Rioja.

Sr. Albrieu. — Por supuesto, señor presidente, que no debemos partir de la base de que la dirección general vaya a proceder arbitrariamente.

Me parecen atinadas las observaciones del señor diputado, pero creo que eso es materia de la reglamentación.

Esta disposición tiende a lo siguiente: en algunas reparticiones existen cuerpos de asesores demasiado numerosos para la cantidad de asuntos en que deben intervenir y la administración, a fin de no causar más grandes erogaciones en el presupuesto y designar mayor número de asesores en otras reparticiones que los necesitan, tiene en la dirección general una especie, diré así, de bolsa de trabajo, en cuanto a los abogados, a los fines de distribuirlos según las necesidades.

La mayor o menor necesidad que tengan las reparticiones se verá por las memorias y por las estadísticas de los trabajos realizados durante los períodos que fije la reglamentación.

Sr. Ravignani. — Esto no debe ser asunto exclusivamente de la reglamentación. Me parece que es substancial y que debe figurar en la ley. Tendremos así, en ella, el recaudo de una limitación. A mi entender no obsta en forma alguna, a las finalidades de la ley, el que concuerda la voluntad del jefe de la repartición.

Sr. Albrieu. — Podría agregarse las palabras «previo informe del ministro del ramo».

Sr. Bagnasco. — O «debiendo recabarse la opinión del jefe».

Sr. Presidente (Pontieri). — ¿La comisión acepta el agregado propuesto.

Sr. Sarraute. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Pontieri). — Se va a leer por Secretaría el agregado aceptado por la comisión.

—Se lee:

...previo informe del jefe de la repartición respectiva.

Sr. Presidente (Pontieri). — Se va a votar el artículo 16, ahora 17, con el agregado leído por Secretaría.

—Resulta afirmativa de 57 votos; votan 82 señores diputados.

Sr. Presidente (Pontieri). — En consideración el artículo 17, que pasa a ser 18.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—Resulta afirmativa de 55 votos; votan 80 señores diputados.

Sr. Presidente (Pontieri). — Está en consideración el artículo 18, que pasa a ser 19.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Ravignani. — Como recordarán los señores diputados, yo hice indicación de que se suprimiera este artículo porque la disposición que contiene está repetida. El artículo 10 establece que para la formación del cuerpo se tendrá en cuenta la constitución actual, eligiendo los abogados, y el artículo que ahora consideramos dice que la dirección seleccionará los funcionarios que actualmente presten servicios.

Como es exactamente la misma disposición, hago indicación de que se suprima este artículo.

Sr. Presidente (Pontieri). — Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Sarraute. — Hay, en realidad, algo de repetición en el artículo; pero también hay algo nuevo, por cuanto especifica que debe hacerse la selección de los funcionarios, inclusive someténdolos a concurso. El artículo 10 establece que se tendrá en cuenta el personal que actualmente existe y que se hará la selección de ellos, sin disponer que sea imprescindible que se haga por concurso. Esto último lo dice el artículo 19.

Por eso la comisión no acepta.

Sr. Presidente (Pontieri). — Se va a votar el artículo 18, ahora 19, sin la palabra «oposición», que ha sido suprimida.

—Se vota y resulta afirmativa de 54 votos; votan 80 señores diputados.

Sr. Presidente (Pontieri). — En consideración el artículo 19, que pasa a ser 20. Se va a votar.

—Resulta afirmativa de 54 votos; votan 80 señores diputados.

Sr. Presidente (Pontieri). — En consideración el artículo 20, ahora 21.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. López Serrot. — Voy a solicitar que antes de votarse este artículo, que entiendo no dará lugar a mayor discusión, se considere otro agregado que voy a proponer, y que estimo fundamental por el propósito moralizador y de defensa del Estado que el mismo entraña.

Se ha hablado, por miembros de uno y otro sector, de la necesidad de organizar el Cuerpo de Abogados del Estado y también de la necesidad de establecer normas que tiendan, en definitiva, a asegurar una mayor moralidad administrativa.

Es viejo el problema de ex abogados y funcionarios de empresas concesionarias de servicios públicos, o de compañías que abastecen a la Nación, a las provincias o a las municipalidades, que renuncian a sus puestos, o se acogen al régimen jubilatorio, para después incorporarse al engranaje de las distintas asesorías del Estado nacional y provincial.

No siempre existe la seguridad de que esos ex dependientes de empresas concesionarias de servicios públicos, o de las empresas o compañías que abastecen al Estado, o a las provincias o a las municipalidades, sean imparciales en sus pronunciamientos o en sus dictámenes. ¿Tendrán la mirada puesta solamente en los intereses del Estado y de la colectividad, olvidándose de la sonrisa que les dirigían en años anteriores las empresas, a las órdenes de las cuales desempeñaron, por poco o por mucho tiempo, las funciones que les habían asignado para que las defendieran?

Por ello, entiendo que es necesario establecer una prohibición para que los abogados que hayan prestado servicio a las órdenes de empresas concesionarias de servicio público o de empresas o compañías abastecedoras de la Nación, de las provincias y de las municipalidades, hayan sido o no remunerados, se encuentren impedidos, totalmente impedidos, por un determinado número de años, de formar parte del Cuerpo de Abogados del Estado.

Sr. Vischi. — Y a la inversa, señor diputado.

Sr. López Serrot. — En este sentido, y haciéndome eco de expresiones vertidas en este recinto, en el período ordinario y en lo que va del presente período de sesiones extraordinarias, sobre la necesidad —en la que yo me hago carne y creo que es una obligación de todos los señores diputados— de bregar por la moralización de la función pública, solicito de la comisión respectiva, en homenaje a ese altísimo propósito de bien público, acepte que se intercale, antes del artículo que acaba de enunciarse, el que voy a leer y que propongo como agregado. «Los abogados que hubieran prestado servicios, remunerados o no, a las órdenes de empresas concesionarias de servicios públicos o proveedoras de materiales para la Nación, las provincias o las municipalidades, no podrán ingresar al Cuerpo de Abogados del Estado hasta después de transcurridos diez años de la fecha en que dejaron definitiva y totalmente de pertenecer a las mismas.»

Sr. Presidente (Pontieri). — Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Sarraute. — El artículo que se propone tiene, indudablemente, una alta finalidad moralizadora; pero se refiere únicamente a los abogados que hubieran prestado servicios. ¿Y los que los prestan actualmente?

Sr. López Serrot. — Entiendo que están comprendidos, y tienen que transcurrir diez años si quieren ingresar.

Sr. Sarraute. — Quiere decir, entonces, que es incompatible el cargo de abogado del Estado con el cargo de abogado de empresas proveedoras de materiales al Estado, y además, que los abogados que hubieran prestado servicios en empresas particulares de esa índole no podrán ingresar a este cuerpo sino después de haber transcurrido algunos años.

Sr. López Serrot. — Desde la fecha en que definitivamente dejaron de prestar servicios en las empresas particulares.

Sr. Sarraute. — Me parece excesivo diez años. Aceptaría cinco años.

Sr. López Serrot. — No hay inconveniente. Lo fundamental es el principio.

Sr. Presidente (Pontieri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Bagnasco. — Me voy a oponer al agregado que ha hecho el señor diputado por la Capital. Mi oposición no se basa, desde luego, en la idea moralizante que fluye del artículo propuesto por el señor diputado, doctor López Serrot, pero creo que de aceptarlo vamos a cometer un yerro. Para subsanar la posible posición de un profesional, contraria a los intereses del Estado, vamos a limitar una profesión liberal, como es la de los abogados, estableciendo un criterio que puede, o no, dar resultado, según sea la calidad moral del profesional que pretende ingresar a la administración nacional. Yo pondría el caso de un jurisconsulto eminente, que se hubiera destacado por su obra jurídica en la universidad o en los tribunales del país, quien, porque en un momento determinado ha defendido a una empresa extranjera en una cuestión jurídica, se hallaría imposibilitado de ingresar a este cuerpo y prestar al Estado el beneficio del caudal de experiencia adquirido en su trabajo.

Para evitar la cuestión planteada, esta ley, en el artículo respectivo, ya habla de la investigación especial, establece el concurso y se refiere a los antecedentes y a los títulos que deben presentar los hombres que aspiren a ingresar a la administración nacional. Pero no puedo aceptar que por un período de diez años se imposibilite a un profesional de ingresar a la administración nacional, porque haya defendido el interés de una empresa extranjera, que puede muy bien ser legítimo y de acuerdo a la Constitución nacional, porque no todas las empresas extranjeras vienen aquí a defender sus intereses en oposición a los intereses de la República, muchas de ellas han traído el progreso. Indiscutiblemente, que cuando el interés de esas empresas esté por encima de la idea republicana y democrática y vaya en contra de los intereses del país, estoy muy de acuerdo que a esas em-

presas y al abogado que las defienda, se los tache de antiargentinitas. Pero no es posible que en virtud de ese criterio, que debe ser muy limitado, porque ataca la ética y la moral de las personas, pongamos nosotros en esta ley un dique que no pueda ser salvado.

Por eso, me opongo terminantemente a este agregado.

Sr. Presidente (Pontieri). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. López Serrot. — No creo que esté en juego la ética y la moral de los abogados, pero lo que es indudable —lo dice una dolorosa y terrible experiencia que ha vivido el país y que el mismo ha pagado con sangre—, es que los hombres que hacen su vida profesional en las empresas de servicios públicos, o en las empresas que ven aumentar permanentemente sus caudales abasteciendo al Estado, a las provincias y a las municipalidades, difícilmente se desvinculan totalmente de ellas después de haber vivido un largo tiempo a su servicio.

Yo deseo para mi país, como seguramente lo han de desear los señores diputados en su mayoría, que los profesionales argentinos que vayan a formar parte de este Cuerpo de Abogados del Estado, estén libres de presiones que puedan venir desde afuera para lograr que los pronunciamientos o dictámenes puedan estar en contra de los intereses argentinos. Deseo también que esos abogados se encuentren libres de trabas por haber defendido a sus viejos patronos, empresas de servicios públicos o abastecedoras del Estado. Y quiero, también, que ellos puedan actuar en forma limpia y clara, sin ninguna reserva, y que no despierten en el público, con sus pronunciamientos, ningún recelo al reconocer, en las mismas firmas que un día rubriquen, los dictámenes expedidos en representación del Estado a los mismos hombres que ayer estaban ante los poderes públicos o ante los tribunales del país defendiendo a las empresas que en cierto modo y casi siempre son enemigas, en la parte administrativa, de las cosas del Estado.

Yo apelo al sentimiento argentino y moralizador de los señores diputados para solicitarles, sobre todo en razón de haber sido aceptado por la comisión, este agregado que introduce en el Cuerpo de Abogados del Estado un factor importantísimo de moralización.

Sr. Presidente (Pontieri). — Tiene la palabra el señor diputado por La Rioja.

Sr. Albrieu. — Sugiero que el artículo que acepta la comisión, de acuerdo a lo expuesto por el señor diputado López Serrot y el señor diputado por Tucumán, quede redactado en la siguiente forma: «Es incompatible el cargo de abogado del Estado con el de abogado a sueldo de empresas particulares de servicios públicos o abastecedores del Estado. Esta incom-

patibilidad continúa hasta el término de cinco años a partir de la cesación de la prestación de servicios en la empresa particular. Con respecto a los abogados de empresas de participación mixta del Estado, termina la incompatibilidad con la cesación del cargo en la empresa mixta», porque este último es un caso completamente distinto. ¿Acepta el señor diputado López Serrot?

Sr. López Serrot. — Yo acepto la redacción que se propone porque el propósito moralizador se alcanza, si la comisión a su vez aceptara decir: «remunerado o no», porque para el caso no interesa que un abogado esté al servicio de empresas de servicios públicos percibiendo sueldo o trabajando en forma gratuita; lo que interesa es que está defendiendo los intereses de una empresa de esa clase.

Sr. Albrieu. — Entonces quedaría en esta forma: «abogado, remunerado o no, de empresas particulares».

Sr. Presidente (Pontieri). — Por Secretaría se va a dar lectura de un artículo nuevo.

Sr. Secretario (Zavalla Carbó). — «Artículo 21. — Es incompatible el cargo de abogado del Estado con el de abogado, remunerado o no, de empresas particulares de servicios públicos o abastecedoras del Estado. Esta incompatibilidad continúa hasta el término de cinco años a partir de la cesación de prestación de servicios en la empresa particular.

«Con respecto a los abogados de empresas de participación mixta del Estado, la incompatibilidad termina con la cesación del cargo en la empresa.»

Sr. Presidente (Pontieri). — En consideración. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo.

—Resultado afirmativa de 63 votos; votan 81 señores diputados.

Sr. Presidente (Pontieri). — En consideración el artículo 20 del despacho, que pasa a ser artículo 22.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—Resultado afirmativa de 60 votos; votan 81 señores diputados.

—El artículo 21 del despacho, que pasa a ser 23, es de forma.

Sr. Presidente (Pontieri). — Queda sancionado el proyecto de ley.

2

ASUNTO ENTRADO

Sr. Albrieu. — Pido la palabra.

Solicito se informe, por Secretaría, si la Comisión de Justicia ha producido despacho en un